

Argentina, la democracia y la rebelión popular

Daniel Campione

Profesor. Universidad de Buenos Aires.

El 20 de diciembre de 2001, la sociedad argentina conoció por primera vez la experiencia de que un presidente fuera expulsado por la presencia activa de millares de personas en las calles.

Sublevaciones que tuvieron rasgos comunes con esta experiencia propiciaron, hace tres décadas, el ocaso de la dictadura militar del período 1966-1973, aunque no se llegó a desplazar directamente a los militares del poder, sino a forzar una retirada más bien gradual y «voluntaria». El hecho de que un presidente tuviera que huir de la casa de gobierno y renunciar a su cargo, acosado por una manifestación popular masiva que no retrocede ante la represión, constituyó, de por sí, una novedad trascendente, un salto cualitativo en el poder efectivo de las masas para cambiar el rumbo político del país.

Un punto inicial para la comprensión de la rebelión argentina es que no se trató de un movimiento puramente espontáneo, de un estallido de un momento, que brotó de la nada para volver a hundirse en ella. Por el contrario, la segunda mitad de la década de los 90 fue un período signado por el aumento del sufrimiento popular. Pero también, y en medida

creciente, por la progresiva pérdida del miedo instaurado desde la dictadura, por la gradual reorganización de los espacios sociales más variados, en una revalorización de la acción colectiva. Al individuo aislado que busca una salvación propuesta desde el poder, le suceden muchos que tratan de encontrar un camino común, tanto para enfrentar el poder como para construir espacios de decisión propia, de creación y autonomía. En el momento del estallido, los componentes de relativa espontaneidad pusieron de manifiesto lo que Antonio Gramsci llamaría elementos de «dirección consciente», que anidaban en su interior. No hubo organización ostensible, en el sentido tradicional de acción concertada y planificada, pero sí una presencia de los sectores organizados y de la conciencia cimentada por las luchas anteriores. Y estos elementos se siguieron manifestando, también, en el auge de las luchas de los meses subsiguientes.

Esa recomposición de las clases subalternas, junto al progresivo hartazgo de la situación de empobrecimiento permanente, más la gradual disipación del opresivo clima ideológico que siguió al derrumbe del bloque del Este, y el ejemplo de otras

protestas multitudinarias, y en ocasiones triunfantes, en otros países de la región, se condensaron para producir la marea humana que el 20 de diciembre de 2001 no retrocedió frente a las balas policiales, sancionó en los hechos la deposición del presidente, y dio pie al final de todo un ciclo político del país. Quienes hasta hacía poco eran aclamados virtuales «salvadores», como el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, eran ahora execrados, incluidos en el repudio global de la consigna «¡Que se vayan todos!». La crisis, puesta ostensiblemente de manifiesto en esos días de diciembre de 2001, era el reflejo del curso de un régimen democrático que, tras casi dos décadas de vigencia, se había degradado hasta el límite, al servir de tapadera a la acumulación creciente de riquezas y poder por el gran capital, el empobrecimiento masivo de las mayorías sociales en Argentina, y el permanente retroceso de cualquier posibilidad de decisión popular sobre los destinos de la sociedad. Vale la pena echar una mirada comprensiva sobre ese proceso, en el cual, curiosamente, la democracia representativa se «estabiliza» en Argentina, por primera vez en su historia reciente; pero a costa de alejarse de toda expectativa de mejora de la calidad de vida de la población, y de configuración de elementos importantes de efectivo «gobierno del pueblo».

Hacia una caracterización de la democracia argentina

Durante los últimos años, una porción muy amplia del pensamiento político se ha aferrado a una concepción de la democracia que la reduce a un conjunto de reglas (elecciones periódicas, sufragio universal, competencia entre partidos, pluralismo social y cultural, etc.), negando toda relación entre democracia y un tipo determinado de organización social.¹ Esta idea abreva en una noción negativa de la libertad, en la que lo importante es garantizar que el Estado no interfiera en las actividades del individuo, y no que la participación de la mayoría de los ciudadanos en las decisiones del Estado se amplíe, a partir de una concepción activa, «positiva», de libertad.

En la práctica, el concepto procedimental de la democracia tiende a desvincular la legitimidad del gobierno del grado en que cumple con los deseos y las necesidades de los ciudadanos. Lo único importante sería el respeto por las reglas de juego, a lo sumo para un conjunto de valores abstractos; pero la distribución de la riqueza, las facilidades para la movilidad social, la calidad de vida, poco tendrían que ver con la democracia. Esta queda reducida a una técnica para establecer el orden sucesorio de los gobiernos en

condiciones pacíficas y estables, dotada con el *plus* de legitimidad que aporta la designación de los gobernantes mediante elecciones competitivas y con sufragio universal.²

Esta interpretación restringida se asocia, en el fondo, con toda una concepción de la vida en sociedad: aquella que coloca las relaciones mercantiles en el lugar supremo entre las relaciones humanas y, en esencia, las considera las únicas dignas de ocupar la inteligencia y el esfuerzo de los seres humanos. Bajo ese manto ideológico, la política es solo un incómodo residuo, un ámbito en el que, por desgracia, la compraventa no funciona (o al menos no hay forma de volver legítima la mercantilización plena de las relaciones políticas), y no hay otro remedio que introducir la votación popular para asignar las funciones de dirección del aparato estatal. El avance de un nuevo modelo de acumulación capitalista —doctrinariamente sustentado en el pleno imperio de las relaciones de mercado, pero traducido en la práctica en un acelerado proceso de concentración del capital e incremento de la subordinación del trabajo humano— requiere de un reduccionismo del componente democrático, del tipo que acabamos de expresar.

La Argentina de hoy es un ejemplo acabado de tal tipo de «minimización» del componente de «gobierno del pueblo» en un sistema de representación política liberal, basado en el sufragio universal. A dos décadas de la restauración de un régimen constitucional en Argentina, una de las lecturas más plausibles de la evolución de su régimen político, es la de interpretarlo como la instauración de una democracia cada vez más limitada a lo procedimental, no solo en el sentido de su pérdida de toda aspiración a contribuir a una transformación social de sentido más igualitario, sino por la disminución progresiva de la incidencia de la ciudadanía en las decisiones, remplazada por el gran capital y una élite política, que depende de aquel de modo cada vez más estrecho.

Hoy se puede hablar en Argentina de una «estabilización» de la democracia, a la luz de que vivimos, por primera vez en la trayectoria del país, el quinto período consecutivo de presidentes elegidos por sufragio popular. La continuidad del anterior fue interrumpida poco después de cumplir sus primeros dos años, por la renuncia del presidente en medio de una virtual insurrección popular, el 20 de diciembre de 2001. Esto dio lugar a su remplazo por mecanismos constitucionales, si bien con aspectos discutibles en su legalidad, y sobre todo en el reconocimiento por la ciudadanía de su legitimidad de origen. Tras un «período de transición», se eligió un nuevo presidente en elecciones que, si bien tuvieron un tránsito tortuoso y las rigió una normativa más que discutible, dieron lugar a que la cúspide del aparato del Estado recuperara legitimidad.³

Queda pendiente la interrogante sobre qué tipo de democracia es la que se está consolidando en este período. Una respuesta tentativa sería que su principal signo consiste en una correlación de fuerzas ampliamente favorable a la clase dominante, manifiesta en una acumulación de poder por parte de esta, tanto en el plano económico como en el político y el cultural, que no tiene precedentes en la historia nacional. El gigantesco proceso de privatizaciones emprendido,⁴ de una amplitud inusitada si se compara con otros países de la región que pasaron por «reformas estructurales» de signo neoliberal (México y Brasil, por ejemplo), fue base fundamental, pero no única, de un nuevo posicionamiento de los grandes conglomerados, que recibieron el control de empresas de transporte y servicios, bancos antes públicos, algunas grandes plantas industriales anteriormente de propiedad estatal, medios de comunicación, etcétera.

La creciente concentración del capital, el descenso del salario real, la desocupación creciente, han sido no ya el telón de fondo, sino el rasgo saliente del proceso social, el que le ha ido asignando sus características.⁵ La promesa simbólica que formulaba el primer presidente de la restauración democrática: «con la democracia se come, se cura, se educa», se ha visto drásticamente desmentida en todos sus términos. La «democracia de la derrota», como se la ha llamado por algunos críticos, al filiar su origen en la dictadura militar y la destrucción de las organizaciones radicalizadas de los 70, es también la democracia de la pobreza y del deterioro de los servicios sociales fundamentales.⁶ Un problema es que, en estas condiciones, no solo entra en tela de juicio la representación política y el régimen democrático, sino también la idea misma del Estado colocado por encima de la sociedad y al servicio del bien común, constitutiva de todo sistema asentado en los principios del liberalismo.⁷

La recuperación del régimen constitucional en Argentina se enmarca en un proceso de restauración de regímenes constitucionales que ha abarcado a toda América Latina, a partir de los primeros años 80, y a instancias de los propios Estados Unidos, que renunciaban así al mantenimiento de dictaduras que se habían revelado, paradójicamente, peligrosas e ineficaces en cuanto a garantizar los intereses norteamericanos y, en algunos casos, los de las burguesías de sus propios países. Algunos de estos regímenes, como es el caso particular de Argentina, habían destruido previamente movimientos políticos que postulaban una transformación social radical, al tiempo que se producían procesos de fragmentación de la clase obrera y los sectores populares, caracterizados por el «re-disciplinamiento» de unas clases subalternas que, a juicio de las clases dominantes, habían cultivado pretensiones

«excesivas».⁸ Esa «tarea», la única para la que se habían mostrado realmente eficaces, constituía una base cierta para un retorno «seguro» a la institucionalidad democrática.

Una de las primeras cuestiones que se deben tener en cuenta es establecer correlaciones temporales entre el cambio de régimen político y la configuración social, económica y cultural de nuestro país y, más específicamente, vincular esas transformaciones con el desarrollo de la confrontación de clases. De lo contrario, se corre el riesgo de realizar un examen centrado en la institucionalidad política, que deja fuera determinaciones sustanciales de las características del desarrollo de la democracia argentina en estos años. En las últimas dos décadas, el conjunto de las relaciones entre clases, grupos y actores sociales se ha modificado, en el sentido de que otorga una preeminencia, de niveles desconocidos hasta ahora, al núcleo más concentrado de la clase dominante, y modifica toda la relación entre el Estado y la sociedad.⁹

Durante un siglo, Argentina fue una sociedad que, de diferentes maneras, avanzó en la integración de sectores crecientemente amplios de su población, creando la ilusión de una «sociedad abierta», que generaba amplias oportunidades de progreso, tanto para los individuos como para el conjunto social. En cambio, a lo largo de las últimas tres décadas, inauguró una tendencia contraria, señalada por la creciente des-ciudadanización de grupos sociales cada vez más numerosos. Ello no puede dejar de tener consecuencias de gran impacto sobre el modo de articularse las relaciones entre Estado y sociedad, y de construir legitimidad desde el Estado, que ya no puede apelar ni a la promesa de movilidad social ascendente, ni a los beneficios de una versión «pobre», pero eficaz, del Estado de bienestar.

Por otra parte, la restauración democrática en Argentina ha resultado contemporánea de la caída, en el plano mundial, del estadio de la acumulación capitalista que permitía una autonomía relativa de las economías nacionales respecto del mercado mundial, sobre la base de compromisos de clase y arreglos neocorporativos, que sustentaban las trabas puestas al movimiento internacional de bienes y capitales, a favor del desarrollo y protección del mercado interno nacional.¹⁰ En ese marco, se ha producido un proceso de estabilización institucional, orientado y estructurado a partir de la determinación, cada vez más directa por parte del gran capital, de las políticas que adoptan los gobiernos elegidos por sufragio popular.¹¹ No solo en nuestro país, sino en toda América Latina, los capitalistas han logrado hacer de las democracias representativas sus subordinadas más eficaces. En comparación con las pasadas dictaduras militares, estas agregan el *plus* de

legitimidad que proporciona el sufragio universal, sin el «costo» de ninguna amenaza seria, hasta el momento, a la configuración clasista de la sociedad.

En cuanto al Estado —ligado durante la etapa posterior a 1945 a políticas sociales integradoras, a la redistribución de ingresos mediante variados tipos de transferencias, y a la búsqueda de alianzas con un empresariado capitalista con estrategias de acumulación más vinculadas a un mercado interno de masas—, ha renunciado a todos esos objetivos. La definición sobre su estructura y su rol posterior a las reformas de mercado, no fue mucho más allá de vagas nociones de reconstrucción del «Estado-gendarme» clásico, con el agregado del cumplimiento de un papel en las políticas sociales y la educación, aunque con un perfil más de financiación, planificación y control, que de asunción directa de responsabilidades en esa actividad.¹² En cualquier caso, al menos en el de Argentina, esa reconstrucción no se cumplió, pues la educación, la salud pública, la justicia, no han dejado de deteriorarse. Como afirma José Nun, el aumento de la pobreza y de la desigualdad están «conduciendo a la consolidación de democracias representativas excluyentes, con una minoría de ciudadanos plenos, lo cual equivale a decir que se trata de regímenes políticos poco democráticos y poco representativos».¹³ Lo que Adam Przeworski llamó, en su momento, la construcción de «bases materiales de la hegemonía»,¹⁴ ha sido dejado a un lado en los objetivos de las políticas públicas de nuestro país.

El proceso de deterioro que sufre la institucionalidad en Argentina se ha vinculado con la crisis de las representaciones políticas, que tiene un alcance mundial. Esto puede ser válido, a condición de que se tenga claro que, en el caso de nuestro país, la crisis de representación es solo un capítulo de una declinación más vasta, que abarca el estancamiento económico, la desarticulación del aparato estatal, la pérdida de eficacia de las apelaciones ideológicas tradicionales y, sobre todo, el brutal aumento de la desigualdad social y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población.¹⁵

No obstante, hoy empieza a aparecer claro que la idea de consumir un proceso de ampliación de la desigualdad y la concentración del poder en todas sus dimensiones, manteniendo las formas de la democracia parlamentaria, ha experimentado dificultades crecientes en América Latina durante los últimos años.¹⁶

¿Qué sociedad y qué democracia tenemos?

Varios autores han señalado que la democracia de los 80 y los 90 se caracteriza por instituciones sometidas al «decisionismo» que se ejerce desde la conducción

estatal, que rebasa normas jurídicas y manifestaciones de voluntad social contrarias a las soluciones elegidas.¹⁷ Sin embargo, nos inclinamos a pensar que se trata de fenómenos más complejos y profundos. La representación política (aun con todas las limitaciones de la democracia parlamentaria) y el sentido amplio de ciudadanía tienden a fenecer, a favor del imperio indiscutido de una élite política, sin otros compromisos firmes que los de procesar las orientaciones del gran capital —que se supone ponga toda su dedicación y recursos en el «posicionamiento» del país en el mercado mundial—, optimizar las posibilidades de obtención de ganancias por la gran empresa en su ámbito territorial, y adecuar en lo posible el plano ideológico-cultural a esos requerimientos. Hacia fuera de las clases dominantes, la preocupación estatal está signada por la «gobernabilidad»; es decir, más por evitar consecuencias políticas perturbadoras de la falta de equidad y las desigualdades reinantes, que por solucionar efectivamente esos problemas.

Las posibles reacciones adversas del capital frente a políticas que considere perjudiciales a sus intereses no son susceptibles de contrapesos, ya que, en esta nueva etapa, aquel puede trasladarse, a bajo costo, de un país a otro, e incluso de una zona del mundo a otra, por lo que los Estados nacionales se ven impulsados a adaptar sus políticas a los «requisitos de ingreso y permanencia» que estos propios capitales, y los organismos financieros internacionales, van fijando.¹⁸

En ese sentido, las dos décadas ya transcurridas de régimen democrático-constitucional aparecen claramente vinculadas a una ofensiva de las clases dominantes de alcance mundial, aunque en nuestro país comenzó a manifestarse con claridad mucho antes, en torno a 1975. El parentesco entre el *shock* económico del ministro Celestino Rodrigo y el planteo de apertura económica, desregulación financiera y «subsidiariedad» del Estado de la dictadura militar, por un lado, y las reformas estructurales puestas en discusión a partir de 1985, e implantadas desde 1989, por otro, no obedece a semejanzas «formales» de las políticas, ni puede reducirse a coincidencias ideológicas entre distintas generaciones de «fundamentalistas de mercado». Por el contrario, unas son el presupuesto necesario de las otras. La acción represiva de la dictadura militar, explícitamente orientada a «derrotar la subversión» encarnada en la contestación armada, aunque realmente encaminada a la tarea estratégica de desarticular la organización obrera y popular y, más aun, sus bases materiales,¹⁹ fue el modo de viabilizar las reformas que luego se emprenderían.

En ese plano, la transición al régimen democrático y su estabilización no les trajo aparejada ninguna ventaja apreciable a las clases subalternas; sino, al contrario, la

Durante los últimos años, una porción muy amplia del pensamiento político se ha aferrado a una concepción de la democracia que la reduce a un conjunto de reglas (elecciones periódicas, sufragio universal, competencia entre partidos, pluralismo social y cultural, etc.), negando toda relación entre democracia y un tipo determinado de organización social.

persistencia del deterioro social y la expansión de las carencias a sectores cada vez más amplios.²⁰ Con el punto de partida de la fuerte revalorización de la democracia, producida a raíz de la última experiencia dictatorial y los daños que esta acarreó, la opinión favorable a la continuidad del régimen democrático no se ha debilitado decisivamente, aunque no puede asegurarse que continúe así por tiempo indefinido. La diferencia fundamental con lo que ocurría en las etapas anteriores es que la pérdida de consenso del régimen político no adquiere las formas de una demanda de «orden» y de cierre autoritario de la situación crítica, sino un repudio que tiende a buscar, aún a tientas, soluciones basadas en la mayor movilización e injerencia popular en la toma de decisiones.

En cambio, si nos remitimos a una caracterización del funcionamiento de la institucionalidad política, se comprueba la vigencia, a grandes rasgos, del régimen establecido en la Constitución nacional, por lo cual el panorama podría resultar, en principio, optimista. En 1989, se ha experimentado el primer traspaso, en décadas, de un presidente regularmente elegido a otro designado en iguales condiciones.²¹ A su vez, esa transferencia de gobierno constituyó el primer caso en la historia del país de traspaso de manos de un jefe del ejecutivo, perteneciente a un partido, a otro de un partido opositor. Aunque los diez años de gobierno de Carlos Menem marcaron algunas amenazas al régimen constitucional (sobre todo por vía de la voluntad reeleccionista del presidente), estas fueron conjuradas, primero, por el pacto que permitió la reelección presidencial de 1995, y luego, por el fracaso de la segunda tentativa, en condiciones de repudio popular, que convencieron al presidente Menem de abandonar voluntariamente su aspiración. El telón de fondo de todo el proceso fueron las condiciones de más que aceptable limpieza electoral, sin proscripciones importantes de organizaciones políticas ni de personas, con funcionamiento ininterrumpido del Congreso de la Nación y vigencia, también aceptable,²² de las libertades públicas. La lista de deficiencias institucionales que pueden señalarse es larga y relevante —incluyendo el funcionamiento de la Justicia, las falencias en la

aplicación del orden legal, el papel desempeñado por la policía y otras fuerzas de seguridad—, pero no alcanza a alterar este juicio fundamental.

Cuando se intenta una mirada más abarcadora de todo este período histórico, se puede pensar en términos de una «crisis orgánica» o «crisis global» de nuestra formación social, que afloró a la superficie, con toda su fuerza, entre fines de los 60 y comienzos de los 70, y que, en 1975, dio lugar a una contraofensiva económica, cultural, política y militar de las clases dominantes, cuyo objetivo era articular una estrategia de erradicación de las «causas profundas» de lo que se consideraba genéricamente como «subversión». Organizaciones obreras poderosas y políticas estatales de corte keynesiano formaban parte de esas «causas», según el diagnóstico de las clases dominantes, y la progresiva destrucción de aquellas fue un presupuesto necesario de transformaciones posteriores con el mismo sentido de clase.

En esta democracia, remitida exclusivamente al plano político, sin pretensiones de transformación social, se asume en toda su fuerza la visión de las teorías elitistas de matriz schumpeteriana,²³ en la que el cuerpo electoral solo escoge a quien va a tomar las decisiones, pero sin ninguna otra incidencia efectiva en el sentido y la orientación de estas, de manera que el componente de decisión popular tiende a tornarse ilusorio.²⁴

En los hechos, hay una caducidad de la ciudadanía social y económica que se proyecta hacia la privación (o la renuncia) de la ciudadanía política.²⁵ En tanto ese apartamiento o «autoexclusión» no conlleva expresiones activas de descontento, se vuelve funcional a la perpetuación de los sectores dominantes en los planos político y económico, que si bien no la propician abiertamente, no se preocupan seriamente por evitarla.

A partir del retorno a la institucionalidad democrática, apuntó a consolidarse un sistema bipartidista, con el mismo par de fuerzas políticas, aunque ambas en proceso de modificación, tanto de su propuesta programática, como del conjunto de sus prácticas políticas. Lo que al comienzo despuntó como una pronunciada moderación de las aspiraciones de cambio que los mismos partidos habían sustentado hasta los años 70, se fue tornando un cambio más

profundo. Estos dos partidos de tradición «popular», fueron adoptando, de modo paulatino, posiciones cada vez más identificadas con propuestas tradicionalmente sustentadas por la derecha conservadora del país; y propendieron a estrechar cada vez más sus vínculos con el gran capital local e internacional, aun a riesgo de debilitar su relación con las clases populares.

Los fenómenos de profesionalización de los cuadros, desradicalización ideológica y desmovilización de las bases, que suelen asociarse a la transformación de los partidos políticos en organizaciones del tipo «atrapa-todo», se han realizado plenamente en el conjunto de los partidos argentinos con incidencia electoral significativa. Los otrora «partidos de masas», como el peronismo o el radicalismo, se han aproximado gradualmente a una conformación de meras maquinarias electorales, cuyos votantes no responden a un claro recorte de clase, y cuyas propuestas programáticas no solo no tienen diferencias apreciables, sino que se desplazan, al unísono, en un sentido progresivamente más conservador.

En cuanto a su rol como componentes del sistema de partidos, además de su legitimación recíproca y la aceptación del juego competitivo, todas las fuerzas han tendido a acatar la disminución de la autonomía de los Estados nacionales a nivel mundial. Ello las llevó a aceptar la eliminación del «campo de decisión» de los gobiernos electos democráticamente, de toda medida que implique algún grado de confrontación (o siquiera de desagrado) de parte del gran capital. Las grandes líneas del manejo macroeconómico tienden a integrarse *de facto* a «políticas de Estado»,²⁶ consideradas invariables, por encima de eventuales cambios de gobierno, aun con alternancia entre diversos partidos. Esto se refuerza con el consenso de un difuso conjunto de actores sociales ligados al gran capital, en el que se mezclan conglomerados internacionales del capital financiero, organismos financieros internacionales, los gobiernos de los Estados más prósperos, grupos económicos menos transnacionalizados, pero con peso decisivo en el plano local, y otros.

Con el desmontaje de las políticas sociales con pretensión de universalidad, se abren asimismo espacios para un nuevo clientelismo, que repasa el proveniente de relaciones sociales precapitalistas, respecto a sectores sociales que no han arribado a un ejercicio político autónomo. Este clientelismo de nuevo tipo adquiere relevancia sobre la base de escenarios de «creciente pobreza y desigualdad, desempleo y subempleo, y retirada del Estado, como los que caracterizan a la Argentina de los años noventa».²⁷ Encuentra parte de sus fuentes en la pretensión de ejercer la contención de sectores sociales marginalizados, a través de políticas sociales focalizadas, destinadas a funcionar como

ambulancia que recoge a los heridos.²⁸ Esas políticas de contención canalizan fondos públicos hacia los sectores más empobrecidos, cuya administración se convierte en eslabón fundamental de vínculos de reciprocidad, y construyen una relación de intercambio desigual, donde se trueca el acceso al asistencialismo por el voto (o la asistencia a actos políticos y colaboraciones en campañas electorales). La administración de estos «programas» posibilita ubicar en los escalones más bajos a militantes profesionalizados, cuya actividad proselitista se sustenta mediante los fondos que estos proveen. Los nuevos rasgos de ese clientelismo y su compatibilidad con formas más modernas de la actividad política quedan evidenciados, sobre todo, en el Partido Justicialista.²⁹

No se trata de que la militancia ideológicamente motivada, desinteresada en términos materiales, haya dejado de existir, sino que se ha confinado a movimientos no partidarios y a agrupaciones radicalizadas, en muchos casos teñidas de un rechazo general a la «política», que se percibe, no sin razón, como reducida a la desenfrenada realización de intereses personales o de grupo, con la cobertura del aparato estatal, usando las organizaciones partidarias como instancia de legitimación, y manteniendo el capital más concentrado, como sempiterno beneficiario en última instancia.

Ese escepticismo global, sin embargo, dificulta la visualización de un campo común de acción para los sectores explotados y excluidos.³⁰ Los movimientos no partidarios suelen quedar atrapados por diferentes particularismos (su implantación meramente local, su dedicación a una reivindicación o gama de reivindicaciones circunscritas, la raigal desconfianza hacia cualquier dirigencia que exceda al propio movimiento, etc.), además de estar sometidos a fuertes presiones dirigidas a su cooptación por organismos internacionales y otras fuerzas atadas al *establishment*, que procuran domesticarlos en las pautas de la «governabilidad»,³¹ presentándoles pseudoalternativas a la política tradicional. Mientras tanto, las fuerzas partidarias identificadas con el sistema no ofrecen campo para las demandas populares, más que en la forma ya vista del «clientelismo», y sus propuestas de pretensión alternativa no alcanzan a salir de una posición marginal.³² Gradualmente, y sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de los 90, fueron apareciendo nuevas organizaciones basadas en la militancia desinteresada, sobre todo de sectores sociales afectados por la pobreza, la desocupación, la falta de vivienda o de tierra que cultivar. En gran parte ajenas a los partidos, y con modelos organizativos distintos a los de los sindicatos y a las organizaciones tradicionales de capas medias, estas organizaciones crecieron en integrantes y capacidad de movilización, a medida que

la pobreza y el desempleo se agudizaban e incluso avanzaban en sectores anteriormente no afectados. Este fenómeno se desarrolló también en consonancia con una progresiva recuperación de la conciencia acerca de la necesidad y posibilidad de «hacer algo», colectivamente, para transformar una sociedad cada vez más injusta y desigual.

La protesta y su perspectiva

Se ha desatado un fuerte clima de descontento globalmente «antipolítico», en amplísimos sectores de la sociedad, que tiende a descartar todo el arco ideológico-partidario, bajo la común acusación de corrupción, ineptitud y desinterés por los problemas reales de la población. La consigna «¡Que se vayan todos!», en alusión sobre todo a la dirigencia política, se ha repetido hasta el cansancio en las manifestaciones callejeras. Una parte importante de la élite ligada al poder económico se suma activamente a esta tendencia al desprestigio, haciendo valer su influencia en los medios de difusión. Parece decidida a avanzar, al parecer sin una alternativa clara, en dirección a profundizar el desprestigio de los políticos y los partidos, sin que quede en evidencia con qué tipo de mediación podrían ser reemplazados. Sin embargo, es el sentido de protesta popular contra un orden injusto el que tiende a prevalecer, hasta el momento, en la interpretación de esta consigna.³³ El cuestionamiento a la dirigencia política y a los partidos es tan fuerte, y tan amplia (en tanto casi no admite excepciones), que las propuestas de reforma política, en circulación desde hace tiempo, no parecen instrumentos aptos para revertir esa situación.

El principal ámbito social que parece capaz de proveer una calidad de dirigencia diferente al contexto de decadencia social y degradación progresiva de la vida política, es el de los movimientos que se han formado en la resistencia a las variadas formas de barbarie desplegadas por el poder en los últimos veinticinco años. Esas organizaciones populares podrían desempeñar un papel fundamental en la reconstrucción, desde abajo, de formas de democracia con un contenido de construcción de mayores niveles de igualdad y de libertad positiva. Sobre todo cuando, desde diciembre de 2001, el grado de visibilidad del descontento popular, y la posibilidad de proporcionarle mayor cauce organizativo en los movimientos «piqueteros» y en las asambleas populares, han dado un salto cualitativo, cuando la movilización masiva y el clamoroso hartazgo ante el agravamiento de la crisis dieron lugar a la forzada renuncia del presidente y su ministro de Economía.³⁴ Este salto tiene una dimensión

particularmente importante, en el hecho de que gran cantidad de personas han ingresado (o reingresado después de mucho tiempo) en la escena política, han abandonado el rol de sujetos pasivos que se informan por los medios de lo que pasa, para pasar a producir ellos mismos lo que sucede. La avalancha de cortes de ruta, «cacerolazos», «escraches»,³⁵ creación de asambleas populares,³⁶ ocupación de espacios antes privados para el uso público, expresó una presencia masiva en las calles,³⁷ que cierta politología había pretendido enseñar a pensar como cosa del pasado.³⁸

Sobre ese sustrato de movilización, se afirma una multitud de experiencias organizativas que no responden al esquema de fuerzas anteriores, conformado por las instituciones públicas, partidos, sindicatos, movimientos sociales, y organizaciones no gubernamentales, sino que insinúan otra lógica. A menudo no se dirigen al aparato estatal en sus reclamos, no responden a los partidos ni a los sindicatos tradicionales; su pensar y sus prácticas no resultan asimilables a las ideologías y tradiciones políticas conocidas. Parecen representar una potencia nueva, una gran capacidad para agrupar y movilizar al heterogéneo resultante social de las transformaciones en curso en el último cuarto de siglo.

Ese cuadro expresa la necesidad de proyectos que puedan apuntar a conjugar partidos políticos no asimilados a la modalidad representativa actual, organizaciones obreras no burocratizadas, y movimientos sociales no tradicionales, dispuestos a superar el plano económico-corporativo, para pasar a la actividad política propiamente dicha. La disposición a cuestionar a la vez el capitalismo monopólico y la «democracia realmente existente», sin vacilaciones ante las coyunturas desfavorables, junto a la voluntad de generar modos de organización profundamente democráticos que no reproduzcan los de selección de líderes y de toma de decisiones del sistema político todavía imperante, pueden ser la base de un combate con perspectivas de éxito contra las múltiples tendencias del sistema a absorber cualquier cuestionamiento. Allí se juega la recuperación del sentido de gobierno del pueblo de un régimen democrático verdadero. El hastío frente a una «institucionalidad democrática» que no da respuestas a ningún problema importante, el distanciamiento creciente frente a una dirigencia a la que se visualiza como ineficiente y corrupta, la recuperada confianza en la posibilidad de movilización y lucha, que incluye la capacidad de obtener ciertos triunfos, juegan a favor de un renacer de esa movilización, en niveles que no se alcanzaban desde los ya lejanos años 1973-1974.

Esas modalidades resultan, en principio, compatibles con el avance hacia mecanismos de articulación con sectores representativos de otras clases sociales, que

amplían el espacio de la protesta, como las capas medias golpeadas por la crisis, movimientos de derechos humanos, organizaciones de profesionales, de intelectuales, estudiantiles, de pequeños productores y empresarios. Los movilizados, tengan trabajo o no, asumen la identidad de trabajadores, lo que suele combinarse con modalidades de organización de base territorial que, junto con el pedido de puestos de trabajo o subsidios para la desocupación, toman reivindicaciones ligadas a la ocupación de tierras o edificios para viviendas, o para usos comunitarios.

La situación actual. Algunos apuntes a modo de conclusión

En ese cuadro, signado por la crisis económica, social, política y cultural, el presidente Néstor Kirchner llegó al gobierno, en mayo de 2003. Lo hizo con un porcentaje de votantes escaso, bastante por debajo de 25%, y luego de que el retiro de su rival (el ex presidente Menem), en la segunda vuelta, le impidiera convalidar su designación con un porcentaje mucho mayor. Ese gobierno emanaba de un proceso electoral tortuoso, regido por normas discutibles en su concepción y aplicación. Sin embargo, cuando la mayoría de la ciudadanía optó por votar en esas elecciones,³⁹ se consiguió un principio de reconstrucción de la legitimidad. Ya en la campaña electoral, las propuestas de los candidatos se habían dividido en dos. Las primeras proponían seguir con políticas de libre mercado y ajuste fiscal, aplicando la represión que fuera necesaria para restaurar el orden (hay que recordar que lograron más de 40% de los votos).⁴⁰ Las segundas apuntaban a producir gestos y propuestas que se diferenciaban, en alguna medida significativa, de las políticas seguidas en la década y media anterior. Entre estas últimas se contaba la de Kirchner, si bien con tintes no muy audaces. No había suscitado apoyos fervorosos durante la campaña, y sus votantes parecían esperar bien poco de su eventual gestión de gobierno. Quizás la debilidad del apoyo electoral y el inusual desemboque del proceso (la referida suspensión del *ballotage*) impulsaron en el nuevo presidente y sus colaboradores la comprensión de que la forma de afianzar al nuevo gobierno era presentarlo como un claro corte con el pasado inmediato. Fue lo que procuraron hacer desde inmediatamente después de la elección.

El gobierno de Néstor Kirchner no puede comprenderse sino a partir de la consideración de los hechos de 2001 y 2002. Toda su gestión puede ser interpretada como una tentativa de respuesta de una parte de la dirigencia política y el empresariado a las

demandas trazadas por la rebelión popular. Esta respuesta se plantea acotada en sus objetivos, y desmovilizante en su modalidad de aplicación. Su finalidad central no es producir un cambio fundamental en las características de la democracia argentina, ni una reversión drástica del proceso de concentración de la riqueza y de deterioro del nivel de vida popular, sino restaurar la «gobernabilidad» y recuperar la idea de unas instituciones políticas eficaces, que puedan aparecer como guiadas por el bien común. Formado mayoritariamente por integrantes de la cuestionada dirigencia política, el gobierno no busca su renovación integral, sino generar las condiciones para que, con mínimas depuraciones y ciertos cambios de orientación, esa dirigencia pueda seguir al frente del aparato estatal, reduciendo a límites tolerables la contestación activa y movilizadora que se había desplegado en los años 2001 y 2002.

En cuanto a sus políticas económicas y sociales, el gobierno se ha abstenido cuidadosamente de producir algún cambio de fondo. Ni el muy regresivo sistema tributario, ni las concesiones de servicios públicos y explotación de recursos naturales al gran capital en condiciones leoninas, ni siquiera el tratamiento y el destino del gasto público del Estado nacional han sufrido transformaciones de importancia. El programa de realizaciones prácticas del gobierno Kirchner en ese terreno sigue caracterizado por la preocupación por incrementar los ingresos públicos (sin variar sus fuentes ni la proporción de los gravámenes), mantener el gasto en términos compatibles con un importante superávit fiscal, pagar puntualmente la deuda con los organismos internacionales mientras se resuelve el *default* con los acreedores privados, y continuar una buena relación con la generalidad de las grandes empresas y conglomerados económicos que operan en el país. Tomando en consideración esos aspectos, un periodista político de primera línea, comentarista del diario tradicional de la derecha argentina, no vacila en calificar a Kirchner de «conservador».⁴¹ Y un economista liberal, se ha referido al carácter «sorprendentemente ortodoxo» de la política económica del gobierno.⁴²

El gobierno tampoco ha planteado, de modo serio y sistemático, la generación de nuevos mecanismos de organización y movilización popular, que pudieran aspirar a revertir el proceso de degradación de la vida democrática. Más bien se orientó a sacar de las calles al movimiento de protesta más numeroso y activo, el de los «piqueteros», frente a quienes ensayó tanto la cooptación de los sectores más moderados, como la represión selectiva de los más díscolos. Hoy los procesados por hechos vinculados a la protesta social suman varios miles.

Lo que se ensaya con más empeño es una táctica de recomposición de la legitimidad. Esta táctica se

centra en reforzar la idea de un gobierno receptivo a las reivindicaciones populares, y no alineado automáticamente a las demandas de los organismos financieros internacionales, los bancos o las compañías privatizadas. Se distanciaría así del decenio de Menem y del trunco período de De la Rúa. A cambio de ese distanciamiento con el capital, tildado de «especulativo», de «extranjero» o de ambas cosas, se propone la promoción de un capitalismo «nacional», «sano», «productivo», modo de formular, en un lenguaje progresista, la idea de que el movimiento social debe renunciar a cualquier impulso anticapitalista, y que la acción de gobierno declina de antemano enfrentarse, en cualquier grado, con el núcleo del poder social existente. Es en los límites de ese improbable capitalismo de rasgos humanizados que deberán desplegarse las aspiraciones de cambio y justicia social.

Con todo, la respuesta popular inicial fue entusiasta. La propuesta de un regreso al imperio de la ley, y la colocación de ciertos límites a los abusos más desmesurados de parte de algunas grandes empresas⁴³ y otros sectores de poder, apareció como audaz y novedosa, en contraste con lo vivido en materia de corrupción e impunidad en todos los terrenos durante las dos décadas anteriores.

El consenso inicial logrado por la nueva orientación de gobierno viene sirviendo, hasta cierto punto, de amortiguador del conflicto social. Las organizaciones debatieron acerca de si mantener una actitud esperanzada frente al rumbo del gobierno, o seguir la lucha con toda la fuerza y la urgencia que exige una situación que sigue siendo terrible, con un amplio abanico de posiciones intermedias. A las importantes divisiones ya preexistentes, se sumaron las producidas en torno a este último punto, que han derivado en divisiones de muchas organizaciones populares. También ha incidido en la morigeración del conflicto y el desprestigio inducido sobre ciertas modalidades de lucha, como los «piquetes» y cortes de ruta.

El reflujo del movimiento social no equivale, sin embargo, a la derrota. Se encuentra hoy en curso una tentativa de parte de sectores de la dirigencia política, dirigida a producir una recomposición de la hegemonía, absorbiendo algunas de las demandas de las masas, que resuta, a todas luces, hija de la movilización, en cuanto aspira a pacificarla sobre la base de concesiones de cierta importancia. Como forma de evitar un nuevo auge de luchas, que desborde las instituciones estatales (que siguen siendo débiles, con fuertes elementos de desarticulación entre sí), intentan producir esos cambios desde arriba, pero planteando, a la vez, una relación más o menos «amigable» con las organizaciones de las clases subalternas, incluso con algunas de las más radicalizadas, e intentar la cooptación de los más moderados.

El clientelismo, como forma privilegiada de acción hacia las clases subalternas, en apogeo en los años 90, tiende a perder centralidad, y hoy la dirigencia más lúcida lo ve como un modo primitivo e inseguro de dominación social, de manera que aspira a volver, siquiera en parte, a políticas integradoras susceptibles de ser una base material estable para la construcción de la hegemonía, lo que parece dificultoso, al menos en el corto plazo.⁴⁴

Desde el gobierno, se pergeñan incluso sutiles operaciones simbólicas, en las que se presenta y valora un vínculo generacional, una cercanía ética, una coincidencia general de ideales con las luchas de la izquierda de los 70,⁴⁵ y con quienes las mantuvieron en alto durante los períodos de tinieblas. El presidente Kirchner ha afirmado «somos hijos de las Madres», en un discurso ante la ONU, lo que marca una línea en el tipo de recomposición del consenso en que se halla comprometido el mandatario actual, no exenta de raptos de audacia, sobre todo en el plano simbólico y discursivo, mucho menos en la distribución efectiva del poder y la riqueza. Ya no es la actitud del puro conservadurismo, de la imposición del miedo a cualquier cambio, de la promesa de enterrar la sociedad argentina anterior a los años 90, sino la de innovar, en línea con los objetivos y valores largo tiempo sepultados de la generación de los últimos 60 y primeros 70.

Se busca asimismo modificar parcialmente la lógica que presidía el aparato estatal, sin romper con ella, ni alterar su núcleo duro, pero al menos volverse a mostrar «receptivo» hacia las demandas populares. Por tanto, apunta con más fuerza a la recomposición del consenso, aunque no a variar la subordinación al gran capital. A lo sumo, se reorienta, en cierta medida, hacia sectores más ligados a la producción agrícola e industrial en gran escala, que a los servicios y la especulación financiera, en línea con el conflicto dentro de las clases dominantes, manifestado con fuerza a partir de la segunda mitad de los 90, luego del consenso inicial que desataron las políticas liberalizadoras y las privatizaciones. Asimismo, busca tejer una alianza con las fuerzas más cercanas a las capas medias ilustradas y progresistas de las grandes ciudades, mientras se apuntala, al propio tiempo, en el Partido Justicialista, al que pertenece y que no vacila hoy en ofrecerle apoyo, como durante diez años lo hiciera con Carlos Menem, como una maquinaria de poder sin ideología ni principios éticos, eficaz hasta ahora para allegar apoyos fundamentales.

Después del reflujo del auge de movilización y lucha que atravesó el año 2002, y vueltas las instituciones políticas a la normalidad relativa de su desenvolvimiento actual, la pregunta que queda abierta es cómo se proyectará en el futuro el proceso, simbolizado en la «bisagra» del 10 al 20 de diciembre. De las

supervaloraciones (más bien lecturas esquemáticas) del momento de auge, que juzgaban hallarse en la antesala de una revolución, se corre el riesgo de pasar a la subvaloración ante el momento de declive, juzgándolo como definitivo e irreversible, y tendiendo a pensar que «no quedó nada» del movimiento. También toma fuerza la idea de abandonar las «fantasías» de transformación social y política profundas, y conformarse con la propuesta de un país «normal», un capitalismo «serio», y unas instituciones «saneadas», que predica el nuevo gobierno. De una manera o de otra, se propende a la «vuelta al redil», a resignarse a que el predominio del capital concentrado y el carácter mediatizado de la democracia política sean características esenciales e inmodificables de nuestras sociedades actuales, de manera que Argentina no sería para nada la excepción.

Pero el país de hoy sigue marcado por las jornadas de diciembre de 2001, y la propia clase dominante y el aparato estatal se han visto forzadas a tomar nota de ello de diferentes maneras. No en vano aparece, una y otra vez en su discurso, la idea de que «Argentina se asomó al abismo». Ellos bien saben que el precipicio no significa necesariamente un caos inmanejable, sino la posibilidad de que las fuerzas populares consigan transformar relaciones sociales fundamentales. Y los supuestos beneficios del orden existente se han desvirtuado lo bastante como para que a la convocatoria a defenderlo le cueste encontrar reclutas entusiastas.

El clima político-cultural ha cambiado. Hasta los adalides de la derecha liberal-conservadora han debido modificar su discurso, y aparentar aguda preocupación con los sufrimientos de las clases subalternas. Cuando el gobierno nacional lanza la consigna de construir un «país normal», está marcando de modo implícito la meta de «normalizar» a las clases subalternas, en el sentido de volverlas a restringir al sufragio como única participación sustancial en la vida política, de sacarlas definitivamente de las calles, pues la dirigencia ha experimentado la pérdida de control de la situación, siquiera pasajera, y desea alejar la posibilidad de que se repita. Apenas se dibuja como alternativa operar cierto «transformismo» que coloque a las movilizaciones populares en una lógica previsible, que vuelva a aceptar una conducción desde arriba, afín al poder político.

En cuanto a las perspectivas abiertas en el futuro cercano, quedan varias interrogantes no resueltas. La primera es la posibilidad de que se produzca un proceso de activación en el movimiento obrero ocupado, bajo el mando o no de las direcciones sindicales tradicionales. La segunda es si el movimiento de trabajadores desocupados mantendrá su presencia pública y, en ese caso, si conseguirá o no formar instancias de articulación más amplias, que procuren recrear el consenso que

alcanzó en otros sectores sociales, en el momento más álgido de la movilización. La tercera es la cuestión de la producción de una convergencia de trabajadores ocupados y desocupados en un movimiento si no único, al menos articulado.⁴⁶ Y la cuarta es si la organización de amplios sectores de las capas medias con propuestas radicales se mantendrá, o profundizará un vuelco «moderado», ya que en este sector parece haber avanzado más la tendencia al reflujo, acelerada por la confianza, masiva en sus ámbitos, hacia el carácter progresivo del nuevo presidente Néstor Kirchner.

Seguramente continuará la puja entre las tendencias al resguardo de autonomía y los esfuerzos de cooptación de las organizaciones populares, para reencauzarlas en los mecanismos de organización y representación tradicionales o, en los casos en que esto ya no es posible, domesticar las nuevas formas organizativas. Ese proceso irá acompañado por la batalla entre los que pretendan reinstaurar un sentido común conformista, que acepte como infranqueables el control de la sociedad toda por el capital, y el formalismo de la democracia realmente existente; y quienes, desde las clases subalternas, sepan procurar adaptar y re-crear, para la duración más prolongada y los momentos de relativa calma, las aspiraciones democráticas y el cuestionamiento al orden social que alentó las movilizaciones de diciembre de 2001.

Notas

1. También se relacionan con esta visión procedimental las concepciones de la democracia que la consideran como una suerte de proyección al plano político de los mecanismos de «libre mercado», en la línea de Joseph Schumpeter en su *Capitalismo, socialismo y democracia*, caps. XXII y XXIII, Folio, Barcelona, 1996.
2. Un fundamentado ataque —desde el punto de vista de su concepción filosófica— de la democracia como procedimiento, se encuentra en C. Castoriadis, «La democracia como procedimiento y como régimen», *El avance de la insignificancia*, Eudeba, Buenos Aires, 1997. A partir de la imposibilidad de disociar igualdad y libertad, llega allí a afirmar «no es posible realizar una “democracia procedimental” que no sea un fraude».
3. Nos referimos a las elecciones de abril-mayo de 2003, que consagraron al actual presidente del país, Néstor Kirchner. El tránsito que llamamos tortuoso responde a reiterados cambios de fechas y reglas para esos comicios, y con un sistema que permitió a los partidos (en la práctica solo al ya gobernante Partido Justicialista) presentar varios candidatos a presidente, sin que un sistema de «lemas» preservara el sentido de la estructura partidaria.
4. En Argentina se privatizaron las empresas de petróleo, teléfonos, ferrocarriles, energía eléctrica, gas, agua y servicios sanitarios, la marina mercante estatal, compañías siderúrgicas, químicas, de fabricación de armas y otros enseres militares, bancos públicos, el sistema jubilatorio y el de seguros contra riesgos de trabajo, el

servicio de correos, el manejo de los aeropuertos, etc. Ningún otro país de América Latina y prácticamente del mundo, afrontó una transferencia de activos del Estado a las empresas capitalistas de parecida magnitud.

5. La evolución del desempleo en las últimas dos décadas marca el tránsito desde una situación de virtual pleno empleo a los porcentajes de trabajadores desempleados más elevadas de la historia del país. La desocupación era de 2,6 % en 1981 y 4,8% en 1982. En mayo de 2002 llegó a situarse por encima de 21%, para luego descender a cifras por debajo de 15%, pero que si se contabiliza como desocupación a quienes reciben subsidios sigue bordeando 20%.

6. «En 1995, la proporción de hogares pobres registró un aumento de 24%, revirtiendo la tendencia al descenso desde 1989 (año que marcaba un punto altísimo, en medio de la crisis hiperinflacionaria). En 1995 se estimaba en 21% el porcentaje de hogares del Gran Buenos Aires que se encontraba por debajo de la línea de pobreza, en tanto que 15,3% tenía sus necesidades básicas insatisfechas. Esto se potencia con el abandono de las políticas sociales universales y su replazo por el gasto social focalizado. Véase Maristella Svampa y Danilo Martuccelli, *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Losada, Buenos Aires, 1997, p. 43. Las cifras que parecían terribles hace seis o siete años, tuvieron algún retroceso en 1996-1997 y volvieron a remontar hasta la actualidad, cuando se calcula que más de la mitad de los menores del país se hallan viviendo bajo la línea de pobreza.

7. Valdría la pena citar aquí a Gramsci, en sus tempranos escritos de *La Città Futura*, acerca del conservadurismo de la idea-fuerza que anima al Estado liberal: «Como idea-límite el programa liberal crea el Estado ético, un Estado que idealmente está por encima de la confrontación de clases, del entrelazamiento y choque de los agrupamientos, de la realidad económica y tradicional. Es una aspiración política de este Estado, más que una realidad política; existe solo como modelo utópico, pero es precisamente su carácter de espejismo el que lo robustece y lo convierte en una fuerza de conservación. En la esperanza de que esto se realiza finalmente en su completa perfección, muchos encuentran el motivo para no rechazarlo, y no tratar de sustituirlo por otro.» Antonio Gramsci, «Tre principii, tre ordini», *La Città Futura*, número único publicado por la Federación Juvenil Socialista Piamontesa, 11 de febrero de 1917, compilado en *Scritti Giovanili*, Einaudi, Turín, 1958, pp. 73-8. (Párrafo traducido por el autor)

8. Uno de los análisis más penetrantes de este operativo de «re-disciplinamiento» de las clases subalternas sigue siendo el de Adolfo Gilly, «La anomalía argentina (Estado, corporaciones y trabajadores)», en Pablo González Casanova, coord., *El Estado en América Latina. Teoría y práctica*, UNU-Siglo XXI, México, DF, 1990.

9. Mabel Thwaites-Rey se refiere a lo vivido en los últimos años como «una verdadera estrategia político-económica que resitúa las bases de la dominación social, define nuevas formas de legitimación-deslegitimación estatal, implica un cambio profundo de las fronteras entre el estado y la sociedad y de los vínculos entre los distintos grupos, clases y actores sociales que se habían configurado durante largas décadas en la Argentina». Mabel Thwaites-Rey, «Ajuste estructural y reforma del Estado en la Argentina de los 90», *Realidad Económica*, Revista del Instituto Argentino de Desarrollo Económico, nn. 160-161, Buenos Aires, noviembre de 1998-febrero de 1999, p. 77.

10. Véase Joaquim Hirsch, *Globalización. Transformación del Estado y democracia*, [s.e.], Córdoba, 1997, p. 27.

11. *Ibíd.*, pp. 28-9.

12. Véase Daniel Campione, «El Estado en Argentina, sus condiciones actuales», *América Libre*, n. 12, Buenos Aires, diciembre de 1997.

13. José Nun, *Marginalidad y exclusión social*, FCE, Buenos Aires, 2001, p. 299.

14. Adam Przeworski, *Capitalismo y socialdemocracia*, Alianza, Madrid, 1988.

15. A favor de este abordaje integrado de la crisis específica de representación, se pronuncia entre otros Hilda Sabato, en un comentario sobre la crisis de los últimos meses. Véase Hilda Sabato, «¿Democracia en agonía?», *Punto de Vista*, a. XXV, n. 72, Buenos Aires, abril de 2002, p. 42.

16. A partir de 1990, ya es larga la lista de presidentes que, en toda América Latina, han sido destituidos por diversos mecanismos, muchas veces previo estallido de vastas protestas populares, desde Collor de Melo en Brasil, a Fujimori en Perú, de la Rúa en Uruguay, hasta Sánchez de Lozada en Bolivia. Cada vez son más frecuentes las rebeliones masivas contra decisiones impopulares o contra toda una gestión de gobierno (como se ha visto, para citar los casos más recientes, en Perú en 2002, frente a medidas privatizadoras, o en las reiteradas protestas campesinas e indígenas de Bolivia y Ecuador), así como los derrumbes electorales y organizativos de partidos políticos con décadas de vigencia y la aparición de nuevos movimientos que logran amplio apoyo.

17. Véanse, con matices entre sí, los ensayos incluidos en Varios, *Peronismo y menemismo*, El Cielo por Asalto, Buenos Aires, 1994.

18. Entre otros análisis de este aspecto de la llamada globalización, se encuentra el de John Holloway, en «Un capital, muchos Estados», *Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental*, a. 1, n. 1, Buenos Aires, otoño de 1994.

19. En un balance sobre las medidas implementadas por el Proceso de Reorganización Nacional para «desmontar el poder sindical», Juan Alemann, quien fuera secretario de Hacienda del dictador Jorge Rafael Videla, enumeraba la atomización de los sindicatos, la reducción de la concentración de personal en las grandes empresas, el crecimiento de las ramas de servicios en detrimento de la industria, y del personal técnico y calificado en relación con el más propiamente obrero, como otros tantos éxitos en esa tarea. Véase Juan Alemann, «Los sindicatos y el poder», *La Nación*, Buenos Aires, 9 de abril de 1987, citado por José Nun, «Cambios en la estructura social argentina», en José Nun y Juan Carlos Portantiero, *Ensayos sobre la transición democrática en Argentina*, Puntosur, Buenos Aires, 1988. En cuanto a la «subversión armada», ya estaba derrotada militarmente al comenzar la dictadura militar, y su poder de fuego siempre fue mucho más reducido que lo que los militares pretendían hacer creer. Véase Hugo Vezzetti, *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002, pp. 55 y ss.

20. Atilio Borón, «Las promesas incumplidas de la democracia», en Varios, *Izquierda, instituciones y lucha de clases*, [s.e.], 1998, p. 44.

21. Debe recordarse que ningún presidente constitucional terminaba su mandato desde la primera presidencia del general Perón, concluida en 1952, y jamás en la historia argentina un presidente emanado de elecciones libres traspasaba el mando a uno de otro partido, también elegido mediante el sufragio universal en condiciones de limpieza.

22. El término «acceptable» no implica valoración positiva de nuestra parte, sino la comprobación de que las condiciones de libertad de expresión, asociación, reunión, etc. no son sustancialmente peores

que las imperantes en la mayoría de las democracias realmente existentes, incluyendo algunas de las más «avanzadas».

23. Con el agravante de que ese enfoque viola las premisas originales de la visión de Schumpeter, que priorizaba el desarrollo económico y circunscribía su campo de aplicación al capitalismo occidental. Véase José Nun, *Marginalidad y exclusión social*, ob. cit., p. 297.

24. En realidad, la posibilidad de escoger entre opciones previamente configuradas por poderes superiores se ha proyectado desde las elecciones a la cotidianeidad por vía del desenfrenado auge de la «encuestología», siempre atenta a pulsar la opinión pública sobre elecciones futuras y acerca de la «imagen» de los posibles candidatos, lo que a su vez encuentra una repercusión de primer orden en los «medios». La expresión de la «opinión» siempre armada sobre preguntas «cerradas» reemplaza así las posibilidades de decisión efectiva.

25. Con el término «renuncia» aludimos aquí a la creciente tendencia a la abstención electoral y al voto en blanco registrado en las elecciones nacionales, que en los comicios a convencionales constituyentes de 1994 llegó a 34,9% del padrón, si se suman ambos índices, ocupando el segundo lugar a nivel nacional y el primero en algunas provincias. De todos modos, el votoblanquismo y la abstención no evolucionan linealmente. Pero fue en las elecciones parlamentarias de octubre de 2001, que estas tendencias, y la muy llamativa emisión masiva de votos nulos de variadas características (fotografías de próceres, boletas con inscripciones insultantes, personajes de historietas, etc.) que estas actitudes de rechazo y protesta llegaron a la cima.

26. Este término ha tenido singular fortuna en los últimos años. Se propone designar aquellas decisiones de pretendido alcance estratégico, ligadas al «interés nacional» y por tanto excluidas de cualquier puja ideológica y partidaria. Se advierte una tendencia creciente a colocar más y más temas, tanto de política exterior como local, bajo ese paraguas que tiende a empobrecer aún más el debate político, y a reforzar la deslegitimación de toda propuesta transformadora.

27. Javier Auyero, «Evita como performance. Mediación y resolución de problemas entre los pobres urbanos del Gran Buenos Aires», *¿Favores por votos? Estudios sobre el clientelismo político contemporáneo*, en Javier Auyero, ed., Losada, Buenos Aires, 1997, p. 172.

28. Véase Carlos M. Vilas, «De ambulancias, bomberos y policías. La política social del neoliberalismo», *Desarrollo Económico*, v. 36, n. 144, Buenos Aires, enero-marzo de 1997, pp. 931 y ss. Allí el autor compara las políticas sociales focalizadas (por oposición al modelo universalista anterior), desvinculadas de cualquier concepto de desarrollo social, con «la ambulancia que recoge a las víctimas de la política económica».

29. «La figura del “puntero” (denominación de prosapia radical y conservadora, pero sin una sólida tradición en el peronismo [comentario nuestro]) se ha convertido en el intermediario indispensable entre jefes políticos y “clientes” en el peronismo de los 90». Véase Javier Auyero, *¿Favores por votos?..*, ed. cit., 1997, p. 169.

30. Mabel Thwaites-Rey apunta certeramente al problema que significa ese escepticismo, como expresión de una «ajenidad» respecto al sistema político «es imprescindible no perder de vista que los altos niveles de “percepción de ajenidad” respecto al sistema político y la crisis de representatividad de quienes lo encarnan no tienen como correlato necesario una adecuada maduración del “espíritu de escisión” del que hablaba Gramsci, ni supone automáticamente un salto cualitativo en la capacidad de

organización autónoma de las clases subalternas». Mabel Thwaites-Rey, «Sobre la política expulsada y la irrupción plebeya», *Actual Marx*, Buenos Aires, julio de 2001, p. 240.

31. Es plenamente aplicable al caso argentino lo que un autor ecuatoriano afirma para América Latina en general: «Desde los círculos de los poderes transnacionales y nacionales, a lo largo de la década de los 90, se ha tratado de imponer a los movimientos populares una sola visión de lo político, las teorías de la gobernabilidad, y una agenda impuesta desde organismos como el Banco Mundial, que los vuelve funcionales a la contrarreforma del Estado, articulados a los denominados procesos de descentralización y autogestión, renunciando a tener una perspectiva total y emancipadora del futuro». Francisco Hidalgo, «Movimientos populares. El debate de alternativas», en Dora Kanoussi, ed., *Gramsci en América*, Universidad de Puebla, Puebla, 2000, p. 60.

32. Argentina posee una izquierda, en parte marxista, en parte de orientación genéricamente definible como populista, que mantiene cierto peso en el terreno cultural, pero no ha superado su dispersión y escasa incidencia, tanto en el terreno electoral como en el de las organizaciones sociales. Su ascenso electoral, sobre todo en las grandes ciudades, en octubre de 2001, no volvió a reflejarse en comicios posteriores.

33. En esta dirección va —nos parece— un comentario de Ricardo Sidicaro sobre la cuestión: «Si la consecuencia de las protestas fue el incremento de la desintegración del reconocimiento y de la legitimidad de las instituciones estatales y los partidos, eso sucedió en virtud de que desde la sociedad se captó correctamente que el maltrato Estado y los cuestionados partidos políticos optaban por alternativas que favorecían los intereses de los actores socioeconómicos predominantes». Ricardo Sidicaro, «Las desintegraciones institucionales argentinas y sus consecuencias sociales», *Punto de Vista*, a. XXV, n. 72, Buenos Aires, abril de 2002, p. 42.

34. El desprestigio de la figura de Domingo Cavallo, y la consiguiente pérdida de su «expectabilidad», han sido muy gravosos para las fuerzas conservadoras de Argentina. Con él se derrumbaba no solo la «convertibilidad», sino la idea de que existía un portador de la solución de la crisis económica, y a la vez posible articulador de un eje político de derecha que hoy aparece muy difícil de construir.

35. «Escrache» es un término del lenguaje lunfardo, que aludía a la figuración, con fotografía incluida, en un protuario policial. Por extensión, se aplica a manifestaciones que pretenden desenmascarar los manejos de alguna persona o institución. Nació como forma de denunciar a los represores de la dictadura impunes ante los vecinos del barrio en que vivían o trabajaban.

36. Denominadas también asambleas barriales o asambleas vecinales, llegaron a crearse centenares de agrupaciones territoriales, que sesionan públicamente y realizan actividades y protestas, siempre con base en un barrio o vecindario determinado. Después de los primeros meses de actividad perdieron parte de su influencia y visibilidad, pero la mayoría de ellas siguen existiendo y desplegando variadas acciones.

37. Esta avalancha de presencia popular en el espacio público ha sido objeto de variados análisis y trazado de perspectivas, algunas de ellas muy interesantes. Entre ellas destaca el libro del Colectivo Situaciones, *19 y 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social*, De Mano en Mano, Buenos Aires, 2002, que juega, entre otros elementos, con la caducidad misma de la idea de *representación*, así como la de *subjetividad política*, que le da base. Sin necesidad de compartir por entero el enfoque, creemos que abre un camino fecundo para el análisis de lo ocurrido y la perspectiva del futuro cercano.

38. Nos referimos a la aseveración, que se convirtió en una suerte de «sentido común» en ciertos círculos intelectuales, de que en los tiempos que corrían, la política se hacía en los medios, y que ya no se movilizaban personas, sino imágenes.

39. Las elecciones nacionales inmediatamente anteriores (octubre de 2001) habían estado marcadas por una fuerte abstención electoral, combinada con la tendencia a emitir sufragios nulos y en blanco. Muchas agrupaciones de la izquierda propugnaron el rechazo al proceso de elecciones presidenciales en 2003, pero la ciudadanía no dio la misma respuesta. Los porcentajes de abstención y votos nulos o en blanco fueron esa vez muy bajos, restituyendo legitimidad al proceso electoral.

40. Si se suman los votos recibidos por el ex presidente Carlos Menem y por el antiguo ministro de Defensa y Economía, Ricardo López Murphy, un destacado economista neoliberal, que alcanzó más de 15% de los sufragios y ocupó el tercer puesto.

41. Joaquín Morales Solá, «El año del aprendizaje presidencial», *La Nación*, Buenos Aires, 5 de enero de 2005. El analista hace esta afirmación en tono celebratorio de las decisiones de tinte ortodoxo de Kirchner. Afirma: «Kirchner es un conservador para cualquier parámetro político europeo. Un presidente obsesionado con la recaudación tributaria diaria [...] y con pagarle cuanto antes al Fondo Monetario no pertenece en Europa a ninguna categoría progresista».

42. «La política macroeconómica de corto plazo ha sido de una ortodoxia sorprendente para simpatizantes y opositores. Ante todo, la política fiscal ha logrado un superávit primario sin antecedentes en nuestra historia económica. Luego de arduas negociaciones con el FMI, en las que se sostuvo que un superávit superior a 3% del PIB atentaba contra los intereses nacionales y la atención de la «deuda interna», resulta que el resultado fiscal del primer semestre alcanzó alrededor de 5% del PIB solamente en el Gobierno Nacional y un nivel de alrededor de 8% del PIB incluyendo los superávits provinciales». María Teijeiro, «La economía política de Kirchner», Centro de Estudios Públicos (CEP), www.cep.org.ar, octubre de 2004.

43. El gobierno nacional se negó a otorgar aumentos de tarifas que pedían las empresas concesionarias de servicios públicos, rescindió algunos contratos con empresas privatizadas de gestión particularmente desastrosa (el servicio de Correos, un ramal ferroviario), e impuso algunas multas por incumplimiento de obligaciones o deficiente prestación de servicios.

44. Esta reconstrucción resulta particularmente ardua, a la luz de que tanto sectores importantes del partido de gobierno, como algunos grupos contestatarios, tienen el intercambio de beneficios como una práctica fundamental, difícil de desarraigar.

45. Incluso se publicitó en abundancia que el presidente y su esposa militaron, en los años 70, en el sector mayoritario de la Juventud Peronista, muy cercano a las orientaciones de la organización armada Montoneros.

46. Una mayor articulación de los movimientos de trabajadores ocupados y desocupados (tanto los de fábricas recuperadas como los más tradicionales) tiene una base en la potencial toma de conciencia del empobrecimiento absoluto de todos los trabajadores, ocupados o no, en los últimos años. Véase Ana C. Dinerstein, «Recobrando la materialidad: el desempleo como espacio de subjetivación invisible y los piqueteros», *Herramienta*, Revista de Ciencias Sociales, n. 22, Buenos Aires, otoño de 2003, p. 100. El otro factor influyente es que la expulsión de trabajadores como fuente del desempleo, por un lado, y la superexplotación y los bajos salarios, por el otro, resultan fenómenos completamente interconectados. Los trabajadores ocupados, formales o no, con contratos de trabajo tradicionales o con alguna de las múltiples formas de contrato temporal, siguen siendo millones de personas en el país. No hay por qué adscribirse a la idea de que el lugar de trabajo haya perdido significación de un modo definitivo como lugar de la movilización y el conflicto, aunque no se pueda seguir pensando en términos de la fábrica tradicional como fuente de la «vanguardia» predeterminada del movimiento de trabajadores. De la tendencia a minimizar la presencia social e influencia de los trabajadores asalariados se ocupan los trabajos compilados en O. Martínez *et al.*, *De eso no se habla. Organización y lucha en los lugares de trabajo*, Taller de Estudios Laborales, Cuadernos del TEL, Buenos Aires, 2002.

© TEMAS, 2005.